

EDITORIAL

ProCultura: un símbolo de la crisis institucional en las regiones

“La falta de control deja al descubierto vulnerabilidades institucionales en Magallanes”.

El escándalo del Caso ProCultura ha dejado una marca imborrable en Magallanes, revelando no solo fallas estructurales en la administración pública, sino también poniendo en jaque el sueño de una descentralización efectiva. Lo que comenzó como una denuncia sobre irregularidades en la asignación de fondos terminó destapando un entramado de decisiones opacas, favoritismos y una preocupante falta de control que han erosionado la confianza en las instituciones regionales y municipales.

La descentralización, esa promesa de autonomía y desarrollo local, se ha visto empañada por la incapacidad de los organismos regionales para gestionar recursos con transparencia. Se suponía que acercar el poder a los territorios permitiría una administración más eficiente, más conectada con las necesidades reales de la comunidad. Pero el Caso ProCultura nos recuerda que la descentralización sin fiscalización es simplemente un traslado de las malas prácticas desde el nivel central al nivel regional. Magallanes, que en su historia ha luchado por mayor autonomía, se encuentra ahora atrapado en una paradoja: reclamar más independencia mientras enfrenta un escándalo que expone las debilidades de su administración.

La credibilidad institucional, ese pilar fundamental de cualquier democracia, se ha visto gravemente afectada. Cuando los ciudadanos ven que los fondos públicos pueden

ser asignados sin supervisión adecuada, cuando las conexiones personales parecen pesar más que el mérito, el daño no es solo económico: es moral. En un país donde la confianza en la política ya es frágil, casos como este refuerzan el cinismo y el desencanto. La Municipalidad de Porvenir, el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deben ahora enfrentar la tarea titánica de recuperar la confianza perdida. Pero ¿cómo? No basta con declaraciones de buenas intenciones ni con sanciones administrativas que rara vez tocan a los verdaderos responsables. La ciudadanía espera cambios profundos, reformas tangibles, una nueva manera de hacer política.

El Caso ProCultura también nos deja una lección amarga: la descentralización no puede ser solo una transferencia de poder, debe ser una transferencia de responsabilidad. Si los gobiernos regionales exigen más autonomía, deben demostrar que pueden manejarla con transparencia y eficiencia. Ahora la pregunta que queda es si los actores políticos estarán a la altura del desafío, si serán capaces de reformar el sistema antes de que el descrédito se vuelva irreversible. La descentralización sigue siendo un camino necesario, pero mientras no se garantice la integridad de sus gestores, siempre quedará la duda de si realmente estamos avanzando o simplemente trasladando los problemas de un nivel de gobierno a otro.